

Los artículos publicados no comprometen a la Superintendencia Bancaria de Colombia y son responsabilidad exclusiva de sus autores.

LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA EN LA CRISIS DE LOS NOVENTA

*Por: Sara Ordóñez Noriega
Ex-Superintendente Bancario (1998-2000)*

La primera acepción que el diccionario trae de la palabra crisis es "la mutación considerable que acaece en una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravarse el enfermo". Podríamos decir, por extensión, que cuando el sistema financiero presenta alteraciones graves, la crisis es el momento en el cual o las supera o se derrumba y arrasa con la economía.

Es entonces cuando el Organismo encargado de su vigilancia, la Superintendencia Bancaria, en el caso de Colombia, adquiere un papel protagónico, cuando queda en el ojo del huracán, en la medida en que las decisiones que tome en protección de la confianza pública en el sistema afecten intereses particulares.

Las alteraciones que precedieron las dos últimas crisis financieras en Colombia, la de los años ochentas y la de finales del siglo, fueron analizadas a profundidad durante un seminario convocado para el efecto por Fedesarrollo y el Fogafín, que reunió en Bogotá, en mayo de 2001, expertos internacionales y naciona-

les en estas materias. Las ponencias y comentarios presentados durante el mismo se publicaron en agosto de 2002 en un libro titulado "Crisis financiera y respuestas de política", de obligatoria lectura para quienes se interesen por estos temas. Coinciden los expertos en las características comunes de desequilibrio macroeconómico que anteceden todas las crisis financieras y, para el caso colombiano, analizan las diferencias y similitudes que hubo entre ambas, destacando entre las primeras el fortalecimiento que tuvo lugar en materia de regulación y supervisión bancaria.

La crisis financiera de los noventa logró superarse con un costo moderado, si se la compara con otras de reciente ocurrencia en el resto del mundo, y sin llevarse de calle a los ahorradores y al sistema de pagos, gracias a la acción oportuna y coordinada de todo el equipo económico del gobierno y del Banco de la República, dentro del cual, por su obvia especialización, la Superintendencia Bancaria fue pieza fundamental dentro del engranaje estatal dispuesto para solventarla.

Carlos Caballero Argáez, en la instalación del mencionado Seminario, expresó: "Como ya se ha mencionado, la entidad de regulación y vigilancia era bastante débil y precaria en lo técnico al desatarse la crisis de los años ochenta". "En contraste con esa situación, y como resultado de los esfuerzos para fortalecer en sus diferentes aspectos, la Superintendencia Bancaria, con posterioridad a la crisis de los ochenta, en los noventa, se encontraba en mucho mejor posición para enfrentar la crisis. Su actividad de supervisión fue intensa, dando énfasis a la inspección "in situ". Procedió a intervenir bancos pequeños como Selfin, Andino y Pacífico y varias compañías de financiamiento comercial y corporaciones financieras. Propició la limpieza de los balances. Promovió y facilitó los procesos de fusión –muy engorrosos en los años ochenta- y de cesión de activos y pasivos. Y fue actor principal en la reorganización de la banca estatal, quizás el cambio estructural de mayor relevancia en el perfil del sector bancario colombiano resultante de la crisis de los años noventa".

El país, que durante el primer quinquenio de la década de los noventa había visto incrementar su Producto Interno Bruto en porcentajes superiores al 5% anual, pasó al 2.1% en el 96, al 3.2% en el 97 y empezó a decrecer en el último trimestre del 98. El déficit de la cuenta corriente no pudo ser compensado por los flujos de capital y se produjo así una pérdida de reservas internacionales, de US \$1.374 millones en el 98 y de US \$348 millones en el primer semestre del 99, con la consiguiente presión sobre la tasa de cambio.

La demanda de divisas fue tan elevada que en el informe del Banco de la República de julio del 98 se lee: "en el presente año la economía colombiana ha vivido turbulencia en los mercados cambiario y monetario". El Banco, para defender la banda cambiaria -existente para entonces- vendió divisas retirando liquidez a la

economía con el consecuente incremento en el costo del dinero. Las altas tasas de interés, más de 20 puntos por encima de la inflación, agravaron la situación de un sector real sobre endeudado y afectado por la recesión de la economía. El desempleo comenzó a elevarse desde el año 95 hasta bordear el 20% en el año 2000 y el precio de la propiedad raíz se vino abajo.

El sector financiero, que había crecido mucho más que la economía durante la época de "vacas gordas", cuando su cartera mostró incrementos de hasta el 55% anual (año 93), empezó a sufrir el efecto combinado de todos estos factores. En el año de 1998, la cartera vencida registró un crecimiento del 75.6% y su relación sobre la cartera total pasó del 6.4% en el 97 al 10.1%. Este deterioro era la lógica consecuencia de la excesiva expansión crediticia que lo precedió. En épocas de bonanza económica, cuando se está en auge, los criterios para analizar proyectos son más amplios y los requisitos para el otorgamiento de crédito pueden ser cumplidos aún por empresas y negocios que no son rentables en el largo plazo. Cuando se desacelera la economía, aparecen las debilidades de las propuestas y un número creciente de deudores, empezando por los que tienen altos niveles de apalancamiento, dejan de cumplir con sus obligaciones.

En estas circunstancias se multiplican las renegociaciones de deudas y las daciones en pago, que afectan negativamente la liquidez y los resultados de los intermediarios; la banca se resiente, se retrae, no quiere incrementar sus riesgos. Viene una situación de estrangulamiento del crédito, conocida como "credit crunch", que entorpece no solo la recuperación de las empresas sino la del propio sistema financiero, que no puede compensar con nuevas operaciones las pérdidas originadas en las antiguas. De esta aversión al riesgo no se escapan en épocas difíciles ni quienes, como los bancos,

tienen su administración como parte de su objeto principal. Cuando la cartera de préstamos deja de ser productiva y al finalizar el año de 1998, la calificada como C, D y E -que además estaba deficientemente provisionada- significaba el 97.8% del patrimonio técnico del sector financiero, nadie quiere elevar su exposición.

Al principio las dificultades se centraron en las entidades más pequeñas, en particular en las compañías de financiamiento comercial y, por razones adicionales, en la banca pública y en el sector cooperativo financiero. Pero luego del desplome de la economía rusa, y tiempo después de la brasilera, como prolongación de la crisis asiática iniciada a mediados del año 97, se contraen las inversiones en los "países emergentes" y negocios prácticamente cerrados, como la venta de Granahorrar, se deshacen y, esa Corporación, la más antigua del sistema de ahorro y vivienda y con cerca de un millón de ahorradores, termina siendo oficializada en octubre del año 98, a escasos dos meses del cambio de gobierno. La junta directiva del Fogafín se reúne de manera extraordinaria, un día domingo, para cumplir la orden de capitalización impartida por la Superintendencia e incumplida por los accionistas de la entidad. Verificada la pérdida del patrimonio, que reduce el valor de las acciones en circulación a un centavo, el Fogafín lo repone y el lunes, como si todo siguiera igual, la entidad abre sus puertas al público.

En ese momento, buena parte del equipo económico se encontraba en Washington asistiendo a la Asamblea del Banco Mundial. A su regreso empiezan a trabajarse los decretos que habrían de expedirse el 16 de noviembre, al amparo de la emergencia económica decretada ese mismo día, con el propósito de "conjurar la crisis e impedir la expansión de sus efectos".

El Ministro de Hacienda sabe que las bajas perspectivas de crecimiento afectan negativamente los estimativos iniciales de ingresos tributarios, que el costo del dinero para América Latina va en ascenso y que no puede contarse con nuevos inversionistas para fortalecer patrimonialmente los sectores financiero y cooperativo. Las disponibilidades del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, creado a raíz de la crisis de los años ochenta para manejar el seguro de depósitos, estaban agotadas con operaciones de apoyo al sector financiero, que ascendieron en lo corrido del año 98 a \$871.372 millones de pesos, y es entonces cuando propone a su equipo que se estudie la posibilidad de crear una contribución que grave las transacciones financieras, con el propósito de destinar su recaudo al salvamento del sector generador del recurso. Le preocupaban especialmente los ahorradores del sector cooperativo, que no contaban con ningún tipo de seguro para sus depósitos, y los deudores del sistema UPAC. Era un mal necesario, como lo dijeron los banqueros en su momento.

Encarga a la Superintendencia Bancaria la evaluación de las necesidades de capitalización; le pide proponer medidas conducentes a sanear y dar liquidez a las entidades financieras y a detener el deterioro de la cartera hipotecaria mediante alivios para los deudores de vivienda; le encomienda calcular, para distintos porcentajes, el producido de la contribución con base en la información disponible sobre número y valor de las transacciones bancarias e interbancarias, y le recomienda, además de la obvia reserva, velocidad y cuidado para que no se desincentive la intermediación, se eviten señales equivocadas que fomenten en los deudores la "cultura de no pago", o se establezcan mecanismos que puedan acarrear la "socialización" de las pérdidas de los intermediarios financieros y estimulen el tan temido "riesgo moral" (moral hazard) en el sector.

Se pudo llevar a cabo la totalidad de la tarea, en tan poco tiempo, gracias al conocimiento que la Superintendencia Bancaria tiene sobre el sector a su cuidado y al grado de profesionalismo y compromiso que caracteriza a sus funcionarios. Durante cinco semanas los días fueron de 18 horas y los sábados y domingos dejaron de ser feriados. Tal vez por eso nadie tuvo ocasión de contar lo que se traía entre manos, y solo el viernes 13 de noviembre, concluida la Junta del Banco de la República, se filtró la noticia de que el Gobierno estaba ad portas de declarar el Estado de Emergencia.

Según las simulaciones realizadas por el equipo técnico de la Superintendencia para distintos escenarios, con el 1.5 por mil como tarifa de la contribución a las transacciones financieras y el 1.2 por diez mil a las operaciones interbancarias, el Fogafín debía recaudar, durante los 14 meses de vigencia de la contribución, una suma que oscilaba entre 1.6 y 1.8 billones de pesos. Durante la discusión de los decretos en el Consejo de Ministros, se incrementó la tarifa del 1.5 al 2 por mil, la que luego, y ya como impuesto permanente, elevó el Congreso al 3 por mil.

Los cálculos y las proyecciones de la Bancaria se cumplieron a cabalidad, por lo que fue una lástima que a los alivios propuestos por esta entidad para los deudores de UPAC se les hubiera hecho un recorte durante la revisión de los proyectos de decreto previa a su presentación al Consejo de Ministros, recorte que en la práctica hizo inoperantes las medidas de la emergencia para detener el deterioro de la cartera hipotecaria.

Luego la H. Corte Constitucional, en fallo del mes de marzo de 1999, dejó también por fuera de la financiación con recursos provenientes del 2 por mil la actividad de las sociedades de inversión colectiva, que pensábamos era el

mecanismo idóneo para liberar a los establecimientos de crédito del peso que sobre sus balances significaba el elevado nivel de activos improductivos alcanzado en los últimos meses.

La H. Corte contrajo la utilización del impuesto a las transacciones financieras a los sectores público y solidario y al otorgamiento de alivios a los deudores de vivienda, mediante los préstamos antes mencionados y unificó en el 2 por mil su tarifa, tanto para las transacciones bancarias como para las interbancarias.

Así las cosas, el inaplazable fortalecimiento de la banca privada debería llevarse a cabo o con recursos propios de los accionistas o mediante créditos del Fogafín provenientes de otras fuentes. Entre tanto se diseñaban las nuevas líneas de capitalización, la cartera continuaba deteriorándose con el consecuente impacto sobre la rentabilidad y los resultados de las entidades crediticias. Las pérdidas del sector al finalizar el año 98 fueron de 1.3 billones de pesos, que hicieron bajar el índice de solvencia del 12.5% al 10.5% con respecto a 1997.

El fantasma de una crisis sistémica seguía amenazando nuestra economía. Los balances de cierre se analizaron minuciosamente por las correspondientes Delegaturas de Intermediación Financiera de la Superintendencia, que ordenaron modificaciones en la calificación de buena parte de los deudores y con ello, al incrementarse considerablemente las provisiones requeridas, 14 de 33 bancos quedaron por debajo del nivel mínimo de solvencia, lo que obligó a expedir las correspondientes órdenes de capitalización. El episodio vivido por el Banco Davivienda fue una clara demostración de la desconfianza que se estaba generando entre el público. Un mensaje transmitido por internet, anunciando que la entidad sería intervenida, originó un pánico entre sus clientes, que en cuestión de horas agotaron las existencias de efectivo del Banco. El Emisor tuvo que

acudir a surtir de liquidez al Banco, y fue necesario que tanto la Superintendencia Bancaria como el propio Ministro de Hacienda desmintieran públicamente la falacia divulgada por el correo electrónico.

La existencia de un riesgo sistémico, cuyos síntomas eran claros, había sido señalada por el Banco de la República en su informe al Congreso del mes de julio de 1998, en los siguientes términos: "El sistema de pagos de una economía depende de forma crucial de la estabilidad del sistema financiero. Las experiencias de los países latinoamericanos durante los años ochenta, incluida la colombiana, y los episodios que se viven actualmente en el Sudeste Asiático y en el Japón, ponen de presente que es indispensable que el sistema financiero sea sólido, que tenga una valoración realista de los activos que respaldan su cartera y que pueda responder con solvencia frente a sus depositantes. Si bien en conjunto el sistema financiero colombiano responde actualmente a esos requerimientos, es necesario estar alerta con aquellas entidades que enfrentan un mayor riesgo en el mediano plazo. La preocupación es justificada por los efectos que una entidad puede generar en el resto del sistema, en particular en momentos en los que la desaceleración de la actividad económica y el aumento en las tasas de interés han deteriorado la calidad de la cartera". Y precisa luego: "La responsabilidad por la estabilidad de cada institución recae en sus administradores y accionistas. Sin embargo, la eventualidad de un riesgo sistémico debe llevar al gobierno a fortalecer la vigilancia y las acciones puntuales de apoyo". Esta alerta, compartida por la Superintendencia Bancaria, se la transmitió al gobierno recientemente elegido durante la reunión sostenida entre el aún no posesionado Presidente y la Junta del Emisor, de la cual da cuenta el periódico "El Tiempo" en su edición del 31 de julio, bajo el siguiente titular: "Hay que capitalizar las enti-

dades más golpeadas: Emisor". "Pastrana, a vigilar la banca."

La percepción de riesgo se fundamentaba en la evolución de las principales variables del sistema en su conjunto, en la proyección de las mismas y en un estudio que venía adelantando el consultor internacional Aristóbulo de Juan sobre un banco virtual, un banco hipotético integrado con las cifras reales de 4 bancos cuyos activos representaban el 28.5% del total del sistema y que mostraba la necesidad de capitalizarlo en un monto cercano a los 5 billones de pesos; es decir, más del doble de su patrimonio, que era para la fecha de 2.1 billones. El estudio que se terminó en septiembre del 98 fue realizado conjuntamente con funcionarios de las Delegaturas de supervisión y, para hacer la evaluación sobre las necesidades de capital, el consultor y los visitadores examinaron puntual y minuciosamente la cartera de préstamos de los 4 bancos escogidos para integrar el "virtual", verificaron las garantías de los créditos, los flujos proyectados de los deudores y, con base en criterios de valoración mucho más estrictos que los vigentes en la reglamentación colombiana y cuya adopción recomendaba el consultor, concluía en la necesidad de capitalización antes indicada.

Desde este punto de partida y con funcionarios entrenados en valorar "in situ" los activos que respaldan la operación bancaria, tal como lo recomendaba el Banco Central, se elaboró un listado de entidades frágiles, donde 19 de 33 se calificaron como de mediano y alto riesgo.

Con el nuevo gravamen a las transacciones, pasada la revisión de constitucionalidad, ya había recursos para la banca pública; creíamos que también para las corporaciones de ahorro y vivienda, vía la normalización de su cartera; estaban en marcha los apoyos al sector solidario y la devolución de los fondos a

los ahorradores que habían perdido su dinero en las cooperativas intervenidas y el gobierno estaba gestionando recursos presupuestarios y financiación externa para que el Fogafín pudiera colaborar en la otra recomendación del Banco, por demás ordenada por la Superintendencia Bancaria: La capitalización del sector.

Mediante Resolución 006 de junio de 1999, se crea en el Fogafín la línea de capitalización de la banca privada, con el fin de que los accionistas de los establecimientos de crédito puedan fortalecerlos patrimonialmente, previo el saneamiento de la entidad, y sujetos al cumplimiento de un convenio de desempeño.

En el interregno, la Superintendencia acentúa su labor de vigilancia y presenta al "comité de manejo de la crisis", un informe de seguimiento de las entidades del sector, con énfasis en las que presentaban fragilidades. Ese comité, que los viernes de cada semana reunía en el Banco de la República al Ministro de Hacienda, al Gerente del Banco, al Director de Planeación y al de Fogafín, con la Superintendente, analizaba las cifras presentadas así como propuestas, tanto de carácter general como individual, con el fin de que todo el equipo económico del Gobierno dispusiera de la misma información, actuara coordinadamente y se tomaran decisiones de consuno para evitar la tan temida crisis sistémica dado que, como la advirtió la Asociación Bancaria en reportaje de su Presidente al periódico "El Tiempo" publicado en la edición del 23 de noviembre de 1998: "la quiebra de un banco puede arrastrar a todo el sistema a una severa crisis".

Fue en ese comité donde se vio la urgencia de reforzar la supervisión consolidada, tal como lo recomienda Basilea, para conocer la verdadera situación de los grupos financieros y mixtos y evaluar el nivel de riesgo al que se encontraban expuestos. En ocasiones se invitaron banqueros a compartir con los miembros

del comité preocupaciones sobre sus negocios y a pedirles colaboración para evitar incrementos en su exposición.

Simultáneamente con su labor de supervisión y con la adopción de medidas tendientes a evitar que las vigiladas, especialmente las de mayor riesgo, incurrieran en causal de toma de posesión, procedió la Superintendencia a modificar el sistema de calificación de cartera y, en consecuencia, el régimen de provisiones vigente. Se buscaba estimular a los bancos para reestructurar la cartera en condiciones y con plazos acordes con la capacidad de pago de los deudores y con el flujo de caja de los proyectos, permitiéndoles, en estos casos, mejorar la calificación de los créditos. Era indispensable romper el "credit crunch" y cambiar la cultura de prestarle a la garantía por la de prestarle al deudor y el momento no podía ser más propicio, dado el volumen de activos improductivos que estaba acumulándose en el sistema.

Acorde con esa filosofía, recogida en la Resolución 039 de 1999, colaboró la Superintendencia Bancaria con la de Sociedades en la preparación de la que hoy es Ley 550, para conseguir la participación del sector financiero en la recuperación empresarial.

Ante el acentuado deterioro del sector hipotecario, el gobierno utilizó la ley marco que la Corte Constitucional le ordenó preparar sobre financiación de vivienda, para incluir a favor de los deudores de UPAC los más grandes alivios de que se tenga memoria. La Superintendencia, que desde la emergencia tenía calculado el costo de diversas opciones, fue pieza fundamental en la preparación y trámite de la ley y, expedida la misma, tuvo a su cuidado el seguimiento y la reglamentación de sus disposiciones, dada la complejidad que revestía la reliquidación de la cartera hipotecaria, máxime cuando las corporaciones habían

adoptado más de setenta sistemas para la financiación a largo plazo.

En agosto del 99 se sancionó la Ley 510 de reforma financiera que había sido presentada por el Ministro Urdinola y que, enriquecida con la experiencia del manejo de la crisis, defendió el Ministro Restrepo. En ella se hicieron más rígidos los requisitos de entrada al sector financiero y se dotó a la Superintendencia de herramientas que le permitieran la detección temprana de riesgos y la utilización de mecanismos de mercado para solucionar problemas de las entidades en dificultades. La ley agilizó los procedimientos para la toma de posesión y liquidación de los intermediarios financieros y, a propuesta del H. Representante Rafael Amador, respaldada por el Ministro de Hacienda, creó la llamada "comisión de la verdad", con el propósito de esclarecer las causas y los responsables del descalabro de la banca pública. La comisión, con la activa participación de la Superintendencia Bancaria, de la cual hizo parte y en cuya sede sesionó semanalmente, entregó su informe en febrero del año 2000; en él se corroboraba el convencimiento del Gobierno de replantear la justificación de la presencia del Estado en el sector financiero, por cuanto la trayectoria de las entidades demostraba que existía un riesgo moral elevado en el otorgamiento de crédito y en el manejo de la cartera. En consecuencia, se decidió que el Estado solo debería atender aquellos sectores que ningún otro intermediario estuviera dispuesto a servir y la Superintendencia aplicó los mismos criterios de supervisión prudencial a la banca pública, con el fin de sanear las entidades, revelando las pérdidas generadas pero no contabilizadas. Fue así como los activos sanos del Banco Central Hipotecario fueron asumidos por Granahorrar, quien igualmente se hizo cargo de los depósitos del público, para lograr que la liquidación del Banco no trajera traumas en la atención de sus clientes.

Para la fecha en que se aprobaron las leyes de vivienda y de intervención económica, las 546 y 550 de diciembre de 1999, respectivamente, ya la amenaza de una crisis sistémica había desaparecido. Superarla le costó a Colombia, según los distintos analistas económicos, entre 6 y 7 puntos del PIB. El costo promedio de las crisis financieras en los países en desarrollo ha sido de 17.1% del PIB, siendo la de mayor costo la Argentina de los años 1980-1982, que alcanzó al 55.1%, seguida por la de Indonesia del 97, con un costo del 50%. En los países desarrollados, el costo promedio de las crisis bancarias ha sido del 6.2% del PIB, siendo la más costosa la del Japón de 1992, que hasta hoy le ha representado 20% de su Producto Interno.

El manejo prudente y firme que se dio en nuestro país a la crisis del sector, permitió que no se presentaran corridas masivas de depósitos. La Superintendencia cumplió a cabalidad con su objetivo, que es "garantizar la confianza del público en el Sistema".

Si bien en Colombia no hubo "corralitos", ni feriados bancarios, ni se socializaron pérdidas, la crisis tuvo costos para todos los agentes involucrados en ella y no significó una "oportunidad" para nadie. Esta es otra de las diferencias que los panelistas del simposio destacan en el manejo de las dos últimas crisis en Colombia; en la de los ochenta, los préstamos para capitalizar las entidades financieras se efectuaron a tasas negativas en términos reales. En la de los noventa solamente recibieron regalos los pequeños ahorradores del sector solidario y los deudores de vivienda. Los dueños de los bancos, empezando por el propio Estado, tuvieron que decidir sobre el futuro de sus instituciones. Fue así como un gran número de entidades, tanto públicas como privadas, se liquidaron voluntariamente o fueron absorbidas por otras instituciones, vía procesos de fusión o integración. Tales, entre otros, los casos

del Megabanco, que incorporó a los Bancos Coopdesarrollo y Bancoop y a las entidades cooperativas Cupocrédito y Coopsibaté, de Corficolombiana que absorbió a Corfiandes, a Indufinanciera y a la Corporación Financiera de Santander S. A., y del Banco Colpatria que absorbió a la Leasing del mismo nombre; se liquidaron voluntariamente la Corporación Financiera de Cundinamarca S. A., Transleasing y algunas fiduciarias, y el gobierno dispuso la disolución y liquidación del Banco Central Hipotecario y de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero. Catorce intermediarios financieros de carácter privado, entre ellos tres bancos, fueron intervenidos cuando se comprobó que no podían cumplir con los requerimientos necesarios para su operación. Once establecimientos de crédito se fortalecieron patrimonialmente mediante la línea de capitalización del Fogafín, entidad que en el año 2001 autorizó un nuevo apoyo para la banca hipotecaria, al que accedieron cuatro instituciones. Se oficializaron Granahorrar y la FES, la primera en consideración al "efecto dominó" que, dado su tamaño, podía desencadenar su liquidación sobre el debilitado sistema de ahorro y vivienda, y la segunda, debido a que, por tratarse de una Fundación, no tenía accionistas que pudieran cumplir la orden de capitalización impartida por la Superintendencia. La banca pública fue saneada y capitalizada en espera de su privatización. Los accionistas de los establecimientos intervenidos para ser li-

quidados perdieron la totalidad de sus aportes; los de Granahorrar, vieron reducir a un centavo el valor de sus acciones; los que liquidaron voluntariamente sus instituciones tuvieron que cancelar previamente la totalidad de sus acreencias y los que se capitalizaron mediante las líneas del Fogafín pagaron por los préstamos tasas reales de interés, debieron sanear sus entidades y dar las garantías que para cada fase del fortalecimiento patrimonial establecieron los reglamentos del Fondo. Los ahorradores y cuenta habientes recibieron parte de sus depósitos a través del seguro de depósitos y sólo terminados los procesos liquidatorios podrá saberse con exactitud el valor de las pérdidas.

Pero el sistema se salvó; la crisis se superó sin que se derrumbara la economía; los 14 intermediarios intervenidos para liquidación representaban el 2% de los activos del sistema, y los 71 que continuaron operando en el nuevo milenio son más conscientes del riesgo involucrado en su actividad, están mucho mejor provisionados y cuentan con mayor respaldo patrimonial. La Superintendencia a su turno incrementó su capacidad de diagnóstico para detectar desequilibrios que puedan afectar al sector bajo su cuidado. Como dice la sabiduría popular: "más sabe el diablo por viejo que por diablo"; tener una Superintendencia octogenaria es prenda de garantía contra la improvisación y el desafuero.

Julio de 2003